

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

CONSULTA - SENTENCIA	
DEMANDANTE	ROBERTO DE JESUS ARTEAGA ORTIZ
DEMANDADOS	ALBERTO TRUJILLO MONTOYA Y MARÍA CRISTINA TRUJILLO
RADICADO	05-001-31-05-019-2012-00925-02
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Relación laboral – Contrato Realidad –
DECISIÓN	Confirma

Medellín, diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)

Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso promovido por el señor **ROBERTO DE JESUS ARTEAGA ORTIZ** contra **ALBERTO TRUJILLO MONTOYA, Y MARÍA CRISTINA TRUJILLO**.

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 026**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, conocer por parte de este colegiado, el grado jurisdiccional de consulta a favor del demandante, respecto de la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín – Ant., el día 24 de agosto de 2021.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso en síntesis lo siguiente: El demandante se vinculó laboralmente con los demandados, por medio de un contrato de trabajo verbal a término indefinido, que inició el 20 de abril de 2002 y terminó el 9 de junio de 2011, cuando los empleadores lo dieron por terminado de manera injusta y unilateral; su horario de trabajo era de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00, y de 2:00 p.m. a 6 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., durante toda la relación laboral; al momento de la terminación del contrato el actor devengaba una asignación laboral equivalente a \$150.000 semanales; la labor para la que fue contratado fue la de mensajero, en Medellín.

Refiere el introductorio que el señor Alberto Trujillo es el propietario del establecimiento de comercio denominado TRUJILLO "TALLER MECANICO" ubicado en la ciudad de Medellín (Ant), y que su hija (del demandado), la señora MARIA CRISTINA TRUJILLO, funge como administradora y jefe inmediata en el mismo ante las ausencias del primero y por orden suya; que los citados demandados eran sus jefes le daban las ordenes, le cancelaban los salarios y le asignaban sus funciones o labores a desarrollar; que en reiteradas ocasiones el actor solicitó a sus empleadores, que lo afiliaran a la Sistema General de Seguridad Social, pero que éstos siempre le contestaban con evasivas, que después se ponían al día con dichas obligaciones.

Señala el actor que durante la relación laboral le tocaba asistir a citas médicas, pues dada la constante exposición a las altas temperaturas y el sol comenzó a sufrir afecciones en sus ojos, por lo que en varias ocasiones fue incapacitado para laborar, pero que estas no le eran canceladas por sus

empleadores, pese a ser conocedores de las mismas, pues les eran notificadas en su momento; que el pasado 09 de Junio de 2012 debió asistir a una nueva cita médica, que para ello solicitó permiso a sus empleadores, al o que estos accedieron; que una vez salió de la cita médica le comunicó a sus empleadores el estado de su salud y estos le dijeron que tranquilo, que no se preocupara, que se fuera a descansar, que ellos lo llamaban para que retomara sus funciones, llamada esta que nunca realizaron y posteriormente le dijeron que no querían continuar con sus servicios, puesto que estaba muy enfermo y que así no podía laborar; que fue despedido de manera injusta y unilateral por sus empleadores.

Manifiesta el demandante que durante toda la relación laboral nunca tuvo llamados de atención, ni sanción alguna; que los demandados no solicitaron permiso ante el Ministerio del Trabajo, ni ante autoridad competente alguna, para dar por terminada la relación laboral, que sostuvieron; que sus empleadores, al terminar la relación laboral, no le cancelaron las Prestaciones Sociales, tales como Cesantías, Intereses a las Cesantías, Vacaciones y Primas de Servicio; que durante el tiempo laborado nunca le consignaron las Cesantías en el respectivo fondo, tampoco le cancelaron los aportes a la seguridad social, ni el subsidio de transporte.

Aduce el actor que los demandados no le hicieron entrega de las dotaciones de calzado y vestido de labores, durante el tiempo laborado, ni le realizaron examen médico de egreso, previo a dar por terminada la relación laboral. Refiere que el Ministerio de la Protección Social inició una investigación en contra de los aquí demandados, por no cumplir con sus obligaciones como empleadores, y que estos, al verse ad portas de una sanción, lo tomaron por sorpresa, como también a sus compañeros de trabajo, y los pusieron a firmar un documento, sin que se asesoraran previamente, y donde supuestamente el demandante manifiesta que entre él y los demandados, no existe un contrato de trabajo, sino un contrato civil de prestación de servicios; que citó al codemandado a una audiencia de conciliación, la que fue infructuosa, toda vez que el codemandado no asistió, ni se excusó dentro del término oportuno.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que SE DECLARE que entre el señor ROBERTO DE JESUS ARTEAGA ORTIZ y los señores ALBERTO TRUJILLO MONTOYA, en su calidad de empleador (Persona Natural) y propietario del establecimiento de comercio denominado TRUJILLO "TALLER MECANICO", y la señora MARIA CRISTINA TRUJILLO, se celebró un contrato de trabajo verbal a término indefinido, que inició el 20 de Abril de 2002 y terminó el 09 de de Junio de 2011, fecha en la cual los demandados lo dieron por terminado de manera injusta y unilateral; Que se CONDENE a los demandados, en forma conjunta, solidaria o separadamente, al pago de los siguientes conceptos: Indemnización por despido injusto; prestaciones sociales por todo el tiempo laborado (Cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y primas de servicios) y auxilio de transporte; sanción moratoria por el no pago oportuno de las prestaciones sociales definitivas; sanción por la no Consignación de las Cesantías en el respectivo fondo; aportes a la seguridad social; perjuicios causados al demandante por la no entrega de las dotaciones de calzado y vestido de labor, por todo el tiempo laborado, indexación de las condenas; costas y gastos del proceso; y condenas Extra y Ultra petita.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Admitida la demanda, los demandados, una vez notificado, contestaron la demanda, a través de apoderado, en los siguientes términos: Frente a los hechos, indicaron que no es cierta la relación laboral que aduce el demandante señalando que jamás éste ha laborado para los demandados; que simplemente en el año 2004, cuando la señora María Cristina Trujillo era propietaria del Taller Trujillo, el actor en forma ocasional o esporádica prestó algunos servicios pero como contratista independiente, sin el cumplimiento de horario de trabajo alguno, tal como lo reconoció el demandante en un documento enviado por éste a la señora Cristina el 18 de junio de 2004; niegan la mayoría de los hechos insistiendo que no hubo relación laboral entre las partes; admiten que el señor Alberto Trujillo es propietario del TALLER ELECTROMECHANICO TRUJILLO, negando que la señora Trujillo haya sido administradora del taller, aunque indican que en una época fue su propietaria.

Se opusieron a las pretensiones de la demanda y propusieron las siguientes excepciones de fondo: Inexistencia de los elementos constitutivos de un contrato laboral; Falta de causa para pedir, por inexistencia de la obligación; prescripción; mala fe por parte del demandante; buena fe de los demandados.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Luego de haberse declarado la nulidad de la audiencia de trámite y juzgamiento celebrada el 7 de septiembre de 2016, por parte del Juzgado de origen mediante auto del 23 de abril de 2019, al advertirse por este Tribunal la ausencia del audio contentivo de la misma, en audiencia pública de juzgamiento celebrada el 24 de agosto de 2021, el juez de conocimiento ABSOLVIÓ a los demandados de las pretensiones incoadas en su contra por el actor, declarando probada la excepción de falta de causa para pedir, por inexistencia de la obligación, propuesta por la pasiva, sin condena en costas por ser el actor beneficiario de amparo de pobreza.

Como fundamento de su decisión, el A quo partió de resaltar los elementos esenciales de la relación laboral, la presunción de que trata el artículo 24 del CST, y la tesis jurisprudencial sobre la primacía de la realidad sobre la forma, para luego hacer alusión a la prueba allegada al proceso, concluyendo que, a partir de dicha prueba, no resulta posible concluir la existencia de una relación regida por un contrato de trabajo por lo que, señala, necesariamente, al estar las demás pretensiones ligadas o ser consecuenciales de esta declaratoria inicial, no prosperan todas las pretensiones de la demanda.

Con relación a la prueba relevante, indicó que obra en el expediente un certificado de cancelación de matrícula comerciante, del señor Alberto Trujillo Montoya, que se realizó el 24 de febrero de 2012, y en el que figura el establecimiento Trujillo “Taller Electromecánico” con matrícula del 30 de julio del año 2002 y la cancelación de dicha matrícula del 24 de febrero del año 2002; que obra igualmente comunicación firmada por el señor Alberto Trujillo quién dice actuar en calidad de administrador del taller Trujillo, donde señala que señor Elio León Pérez hace aproximadamente un año presta sus servicios como contratista

independiente en su calidad de mecánico del taller, sin cumplir ningún horario de trabajo y con sus propias herramientas, y deja constancia de los pagos que se hacen pero precisa que no existe ninguna relación laboral entre el señor Pérez y el taller.

Que también se aportó comunicación dirigida por la señora María Trujillo a Luder Rojas Camargo en calidad de inspector de trabajo, en la que señala que es cierto que es propietaria del taller Trujillo, el cual dentro de su objeto social se dedica a la mecánica automotriz, que por su actividad laboral no se requiere contratar laboralmente, que las personas no cumplen con horarios del taller, son completamente independientes y llevan su propia herramienta, y no tienen ninguna subordinación, por lo que no cumplen los presupuestos del artículo 23 del código de trabajo para que se configure contrato de trabajo; que para corroborar lo afirmado anexa carta dirigida a ella por los señores Roberto Arteaga Ortiz y el señor Pérez Quintero en las que expresamente manifiestan a ese despacho que no los une ninguna relación laboral con ella.

Hace alusión a la misiva del 18 de julio de 2004 del señor Roberto Arteaga Ortiz a Lina María de Trujillo donde el actor indica que entre él y el taller no hay vinculación laboral regida por un contrato de trabajo, que su vinculación al taller no es permanente ni continúa, sino que presta servicios de manera esporádica, ocasional, en calidad de contratista independiente, que le pagan por porcentaje luego de sacar los costos del taller, concluyendo que jamás se ha considerado empleado del taller Trujillo y de la señora María Cristina Trujillo Arango. No da valor probatorio a documentos atinentes a pagos, sin firma de los supuestos empleadores, como tampoco, a documentos diligenciados a mano con anotaciones que no cuentan con firma para establecer quién los elabora y por ello, tampoco es posible tener en cuenta su contenido; que también se observa una comunicación firmada por los demandados dirigida a la señora Marta Medina donde informan de la cancelación del contrato de arrendamiento del local situado en la calle 25 número 43 G 74, donde funcionaba el Taller Tall tru, que se mencionan en la comunicación dirigida por el señor Roberto a la señora María Cristina, y contrato de venta de establecimiento de comercio entre la señora María Trujillo como vendedora y el señor Alberto Trujillo como comprador, del 6 de octubre del año 2007. Indica el fallador que de los interrogatorios que

absolvieron las partes no se aprecia confesión alguna sobre los hechos, por parte de estas, señalando que realmente lo que se vislumbra de ellos es que se sustentan o se mantienen las posiciones esgrimidas desde la demanda y la contestación.

Llama la atención sobre la documental allegada por ambas partes y firmada por el señor Roberto donde afirma que no existía subordinación o dependencia, que su vinculación al taller no era permanente ni continúa sino prestaba sus servicios de manera esporádica u ocasional y que no existían obligaciones laborales para con él; que si bien la parte demandante adujo que suscribió el documento a partir de engaños y sin asesoría, tal afirmación no encuentra soporte probatorio, sin que se observe la presencia de un vicio del consentimiento a la hora de firmar ese documento, lo que desvirtúa el elemento subordinación de la relación de trabajo, por lo que, concluye, en el presente caso no es posible concluir la presencia de un contrato de trabajo; que si bien la única referencia que se hace sobre una vinculación del actor son: La carta que dirige el señor Roberto a la señora María Cristina, la comunicación remitida por esta al ministerio de trabajo en junio de 2004 donde hace referencia a los señores Roberto Arteaga y Helio Pérez Quintero, para el año 2004, pero que no hay ningún otro elemento probatorio en cuanto a los extremos temporales.

Señala que, incluso, en el hipotético caso de haberse acreditado los extremos temporales aducidos en la demanda, es claro que los eventuales derechos que pueden existir, salvo lo que eventualmente correspondería a los aportes a seguridad en pensión, se encuentran afectados del fenómeno prescriptivo, pues en el supuesto de que existiere el derecho y que la relación terminara en junio del 2011, como sostiene el acto, si bien la demanda es presentada en el año 2012, el 23 de agosto, la notificación del auto admisorio, que tiene fecha del 30 de agosto del 2012, no se da dentro del año siguiente, sino se produce hasta el 13 de mayo del 2015, por lo que el término de la prescripción, de 3 años, se interrumpió solo en esa última fecha, por tanto estarían llamados a la prescripción todas las reclamaciones que se hacen en cuanto a prestaciones sociales, vacaciones, sanciones y si bien, como anotó, frente los aportes a seguridad en pensión no opera el fenómeno prescriptivo, como concluyó según

el análisis realizado, al no considerarse que existió contrato de trabajo, no da lugar a imponer condena ni siquiera por este concepto.

VI. GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA -

En atención a que la sentencia de primera instancia no fue recurrida en alzada por los apoderados judiciales de las partes, y que dicha sentencia va en contra de los intereses de la parte actora, se dispuso la remisión del proceso a este Tribunal de Distrito Judicial, para que se surta a su favor el grado jurisdiccional de consulta, tal como lo prevé el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Alegatos de conclusión

Los apoderados judiciales de las partes se abstuvieron de presentar alegatos de conclusión en segunda instancia.

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Naturaleza jurídica de la pretensión. – Contrato Realidad.

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Los problemas jurídicos a resolver en esta instancia, teniendo en cuenta que se conoce el asunto bajo el grado jurisdiccional de consulta, consisten en determinar si, contrario a lo dispuesto por el a quo, en el presente se presentó un contrato de trabajo entre las partes y, de ser así, se establecerá si están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda.

Para desatar la Litis, cabe recordar que el artículo 23 del CST determina los elementos que configuran el contrato de trabajo así:

- a) Actividad personal del trabajador, es decir, la realizada por sí mismo.
- b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono.
- c) Un salario. Como retribución del servicio.

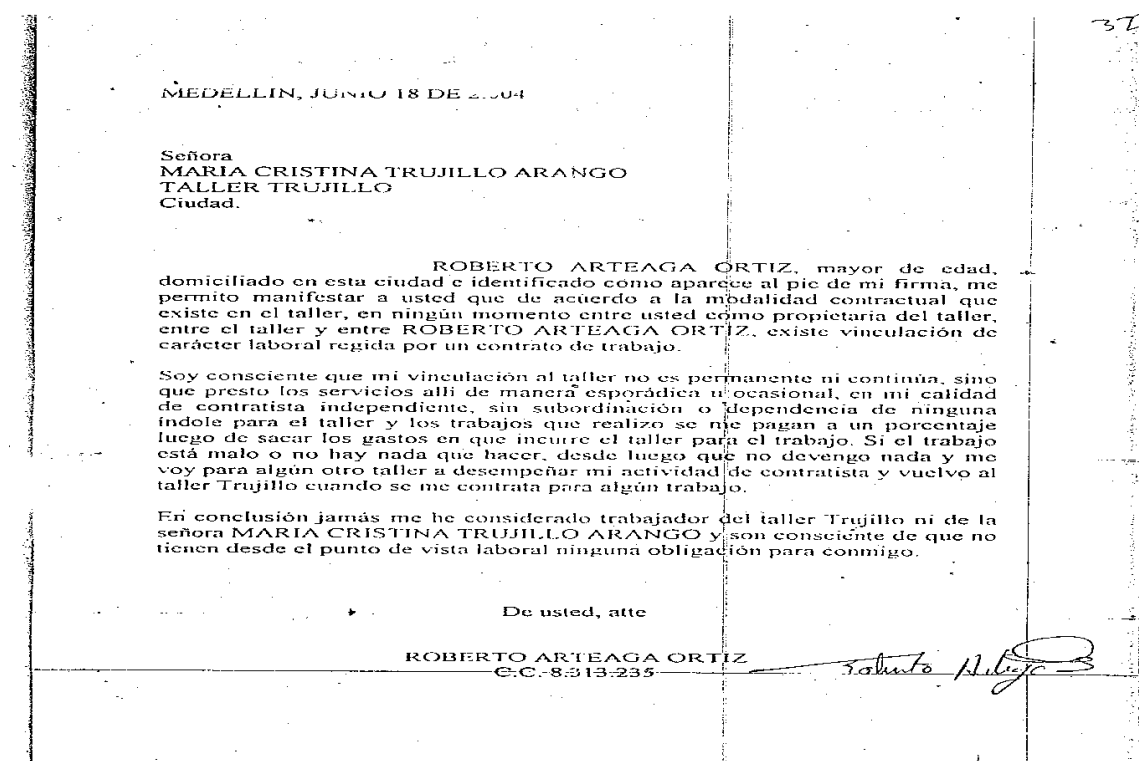
En ese orden de ideas, es claro que para la existencia válida de una relación laboral contractual es necesario que concurren los tres elementos antes reseñados, sin importar la denominación que los contratantes impongan al mismo, circunstancia que tiene sustento Constitucional en el artículo 53 superior que consagra el principio de la primacía de la realidad sobre las formas; de no serlo así indefectiblemente se estaría en presencia de otra clase de contrato, no sujeto por consiguiente a la ley laboral.

Por su parte, el artículo 24 del C.S.T. consagra una presunción legal, según la cual “toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”, y la consecuencia de su aplicación, no es otra que la inversión de la carga de la prueba, es decir, una vez demostrada por la parte actora la prestación personal de servicios en favor de parte la demandada, dentro de unos determinados extremos temporales, incumbe a esta última desvirtuar la existencia del vínculo presumido, a través de los medios probatorios legalmente establecidos, esto es, probar que dicha prestación de servicios no fue subordinada ni dependiente.

Ahora, pese a la presunción legal a la que se ha hecho referencia, para la declaratoria del contrato realidad, corresponde al trabajador, además de demostrar la prestación personal del servicio, acreditar los extremos temporales, el monto del salario, la jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario y el hecho el despido, cuando éstos 2 últimos se aducen, entre otros aspectos, tal como ha reiterado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (ver, entre otras, la sentencia del 4 de noviembre de 2015, SL 16110-2015). Como puede advertirse, es claro que el elemento de la actividad personal, que es el pilar de la relación laboral y en el que se finca la presunción del artículo 24 del CST, debe encontrarse plenamente probado en el proceso por la activa, de conformidad con lo establecido en el canon 167 del CGP.

En el sub examine, de una valoración probatoria integral, esta sala destaca que, como concluyó el a quo, no se encuentra acreditada la relación laboral aducida en la demanda, agregando la Colegiatura en esta oportunidad que, de haberse presentado alguna actividad personal, esta fue esporádica, ocasional, sin que pueda determinarse los extremos temporales de alguna de ellas.

En efecto, dentro de la prueba allegada al proceso, se observa comunicación suscrita por el actor indicando lo siguiente:



En esta misiva, de fecha 18 de junio de 2004 (Folio 45 del expediente digital) , dirigida a la codemandada María Cristina Trujillo Arango, el señor Roberto Arteaga, quien la suscribe, confiesa que su vinculación en el taller no fue mediante contrato laboral sino como contratista independiente, indicando que no existía subordinación o dependencia, que dicha vinculación no era permanente ni continua, que eran servicios prestado de manera esporádica u ocasional, sin que existieran obligaciones laborales para con él; carta que se anexó a una respuesta de la codemandada Trujillo Arango, de fecha 22 de junio de 2004 (Fol. 42 y 43 del expediente digital), ante requerimiento del Inspector de Trabajo.

Es pertinente advertir que, si bien el demandante manifiesta en el libelo introductorio, y luego en el interrogatorio que absolvió, que fue presionado para firmar la carta en mención, no hay prueba alguna de la que se pueda inferir que existió un vicio de consentimiento, como coligió el a quo, resaltando la Sala que el actor no presentó prueba testimonial alguna al proceso que corroborara sus afirmaciones en tal sentido. Sobre esa forma de contratación en el taller, no de naturaleza laboral, da cuenta también la certificación visible a folios 42 del expediente digital, de fecha julio 19 de 2005, en la que el señor Trujillo Montoya hace constar que el señor Elio León Pérez, desde hace aproximadamente 1 años, presta sus servicios como contratista independiente en su calidad de mecánico, al taller.

Ahora, al igual que el fallador de primera instancia, estima la sala no es posible valorar el documento obrante a folios 50 a 59, atinentes a un pago que como mensajero, y por el término del 15 al 20 de abril de 2002 recibió éste, pues carecen de firma o membrete de sus supuestos empleadores, como tampoco, los diligenciados a mano, también del 2002, sin firma alguna. pues no dan certeza de su autoría o de la veracidad de su contenido.

Resalta la Sala que los codemandados, al igual que el actor, rindieron interrogatorio de parte en el proceso, reiterando las versiones dadas en la demanda y su contestación.

Se destaca que el señor ALBERTO TRUJILLO MONTOYA, en su interrogatorio, negó enfáticamente la existencia de una relación laboral con el actor; sobre la misiva de la señora María Cristina Trujillo, donde se manifiesta que el señor Roberto Arteaga estaba a su servicio como contratista independiente para el taller s de propiedad, indicó que el actor no realizaba actividad alguna. Al preguntársele sobre cuáles eran las personas que prestaban sus servicios en el taller entre los años 2002 y 2011, respondió que Elio Pérez y un hijo, que trabajan como contratistas en el taller y que no había ninguno más, uno era mecánico y el hijo de él le ayudaba; al preguntarle sobre las labores de mensajería y sobre los domicilios de repuestos y qué personas las desarrollaban entre los años 2002 y 2011, respondió: *“Los domicilios se piden por teléfono y le llegan a uno los repuestos al taller”*, y al indagarle sobre el señor Roberto Arteaga, indicó que lo

utilizaban para que trajera algún repuestos, pero que también lo utilizaban otras personas en la misma manzana; que eso pasaba cuando pedían un repuesto a un almacén y, si les decían que se demoraba demasiado, mandaban Roberto o a cualquiera de los muchachos que les servían por ahí, para conseguir los repuestos. Señala que él era el único dueño del taller y que en el tiempo que estuvo enfermo lo fue su hija María Cristina, y que después de que él se alivió, siguió trabajando solo; Indica que, cuando encomendaba alguna labor al señor Roberto Arteaga, él podía mandar a otra persona para que la realizara, pues tenía autonomía. Aclara que no utiliza o necesita muchos repuestos por lo que él mismo podía ir al almacén o pedirlo e inmediatamente se lo mandaban; que cuando iba el actor por algún repuesto, era porque se lo pedía cualquiera que estuviera, o el dueño del carro, o él, y que por ello se le daba una liguita; que iba un día o el otro día no iba, pues se iba para el seguro social y lo atendían.

Por su parte, la codemandada MARÍA CRISTINA TRUJILLO ARANGO, niega que ella no era encargada de hacer contrataciones, y manifiesta que pero es que don Roberto nunca estuvo trabajando directamente con su padre; que lo conoció cuando ella llevaba su carro y él algunas veces se lo lavaba cuando estaba allá haciendo vueltas, pero que él nunca fue trabajador de su padre; que por un periodo corto ella administró ese establecimiento comercial, mientras él está enfermo y alguien tenía que quedarse, pero que no recuerda bien. Señala que entre el 2002-2011 estaban en el taller 2 personas, su papá y 1 o 2 personas más, uno mecánico pero que no recuerda los nombres; que los domicilios se pedían y llegaban allí, que los llevaban generalmente; que había más personas que hacían vueltas en el taller; que cuando el actor hacía un domicilio, se le pagaba; que a él se le daba plata al igual que cualquiera de los que hacían domicilio; que si lavaba un carrito también; que si llegaba uno de los clientes y decía por ejemplo que si quería que le lavara el carro, entonces ellos le pagaban, señalando que en otros talleres le decían que hiciera un domicilio y él lo hacía.; que él le trabajaba como a todo el mundo si se hacía un domicilio se le pagaba, que si lavaba un carro, se le pagaba, les pagaban ellos o les pagaba algún cliente que indicaba que le lavara el carro; refiere que el señor Roberto *“...había días que iba por el taller, había días que no iba, había días que le trabajaba a otras personas, que si se necesitaba hacer una vuelta y él estaba por ahí pues se le decía a él, si no estaba por ahí a otra persona; él lo único que si*

hacía todos los días es que llevaba la bicicleta para que mi papá se la guardara en el taller, eso sí lo teníamos claro, porque él decía que le dejara poner allá su bicicleta y se la dejaban allá, pero que si tuviera que entrar a cierta hora o saliera a cierta hora, no”

De los dichos de los codemandados se evidencia que el actor en algunas oportunidades realizaba alguna actividad personal al servicio del taller, propiedad del señor Montoya Trujillo, haciendo lo que comúnmente se llama mandados, como ir por algún repuesto, o lavar un carro, por los que recibía , y que tal actividad no la hacía en forma exclusiva porque también realizaba ese tipo de actividades a terceros, advirtiéndole la Sala que el actor, quien tenía la carga probatoria al respecto, no acreditó los extremos temporales de dichas actividades, ni menos aún la jornada en que éstas ocurrían, con el agravante de haber confesado que su vínculo con los demandados no fue de carácter laboral, sino de otra índole, sin dependencia o subordinación alguna.

Así las cosas, al no haberse acreditado la relación laboral aducida en la demanda, se impone **confirmar** íntegramente la sentencia de primera instancia.

Sin costas en esta instancia, al ser el actor beneficiario de amparo de pobreza y conocerse el asunto bajo el grado jurisdiccional de consulta.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR íntegramente la sentencia de primera instancia, de fecha y procedencia conocidas, que se ha conocido en consulta, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia, por lo indicado en precedencia.

TERCERO: En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

CUARTO: Se ordena la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada